

JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA (pp. 2-7)

—

JURISPRUDÈNCIA AMBIENTAL A LA COMUNITAT VALENCIANA (pp. 8-13)

MARTA OLLER RUBERT

Profesora contratada doctora de Derecho Administrativo / Professora contractada doctora de Dret Administratiu

Universitat Jaume I

Sumario: 1. Telefonía móvil y medio ambiente (sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 300/2011, de 25 de marzo, y 347/2011, de 7 de abril). 2. Energías renovables (sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 294/2011, de 22 de marzo, y 1307/2011, de 24 de junio). 3. Urbanismo y medio ambiente (sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 292/2011, de 22 de marzo; 241/2011, de 21 de marzo, y 291/2011, de 29 de marzo; Sentencia 316/2011, de 4 de abril). 4. Parques naturales (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 172/2011, de 28 de febrero).

A lo largo del año 2011 los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana relacionados con el medio ambiente han sido numerosos y de gran variedad temática; ello puede tener dos lecturas: por una parte, que los daños al medio ambiente se han convertido, lamentablemente, en una constante; por otra, con carácter positivo, el mayor control que los tribunales hacen del medio natural, favoreciendo su protección. De las sentencias examinadas pasamos a destacar aquellas que nos parecen más relevantes.

1. Telefonía móvil y medio ambiente

En la Sentencia del TSJ de la CV 300/2011, de 25 de marzo, el objeto de discusión es la aprobación de una ordenanza municipal reguladora de los requisitos urbanísticos para la instalación y colocación de infraestructuras radioeléctricas en un municipio que es recurrida por France Telecom España, S. A. El Tribunal, estimando en parte el recurso, anula el artículo 6.1.c) de la ordenanza, en el que se prohíbe la instalación de infraestructuras en espacios sensibles y se fija una distancia mínima entre esas zonas y cualquier construcción de estaciones radioeléctricas. Asimismo, aborda la polémica sobre si es necesario o no exigir “licencia de actividad” a los operadores de telefonía móvil, recogiendo las dos posturas mantenidas en la jurisprudencia: por una parte, aquellos pronunciamientos que entienden justificada esta exigencia, como en el caso de la Sentencia del TSJCV 441/2003, de 17 de marzo, sobre la base del principio de precaución y de lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 2414/1961, de 30 de diciembre; por otra, aquellas sentencias que, como la del TSJ de Navarra de 2 de octubre de 2010, basándose en el principio *favor libertatis*, aconsejan no imponer restricciones, adoptando la Sala en el asunto que nos ocupa esta segunda opción. En relación con las competencias municipales, entiende el TSJ, siguiendo la jurisprudencia del TS, que los municipios pueden regular las materias de urbanismo y medio ambiente sobre la base de las competencias que se les reconocen, pero no por ello excederse en su ejercicio.

También en relación con esta temática, en la Sentencia del TSJCV 347/2011, de 7 de abril, se discute sobre la suspensión de unas obras para la instalación de una estación base de telefonía móvil debido a la necesidad de que la instalación de antenas móviles tenga, por exigencia de las ordenanzas municipales, licencia de actividad. Cuestión que, habiendo sido tratada en numerosas sentencias como la anterior, se considera contraria a derecho y cuya exigencia, por tratarse de una cuestión de competencia estatal, es nula.

2. Energías renovables

El TSJ de la Comunidad Valenciana, en su pronunciamiento 294/2011, de 22 de marzo, conoce del recurso interpuesto por una asociación ecologista contra una orden de la Administración valenciana autonómica en la que se realiza nueva convocatoria pública para el desarrollo y ejecución del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, con el fin de albergar en algunas zonas un mayor número de estaciones eólicas. En primer lugar, el TSJ se plantea si cabe recurso indirecto contra el Plan Eólico, al no tratarse este de una disposición de carácter general. El TSJ le atribuye, no obstante, carácter normativo y entiende, por lo tanto, que es susceptible de recurso indirecto, que debe versar, sin embargo, dado el carácter normativo limitado del Plan, sobre motivos concretos que relacionen la convocatoria impugnada con el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana. De gran interés es el FJ n.º 5, en el que siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se reconoce al medio ambiente un valor esencial que debe ser tenido en cuenta en el discernimiento de conflictos, pero que, también, debe compaginarse y ponderarse con otros bienes constitucionalmente relevantes, como el desarrollo económico, no prevaleciendo siempre el interés ambiental. En este caso, las instalaciones eólicas presentan intrínsecamente un evidente valor ambiental, al encuadrarse dentro de las denominadas “energías renovables”, pero con unas consecuencias económicas evidentes. El TSJ desestima el recurso interpuesto en su totalidad.

El TSJ trata en este pronunciamiento, el 1307/2011, de 24 de junio, sobre diversos recursos interpuestos por una mercantil contra el Acuerdo del *conseller* de Medio Ambiente que deniega la declaración de interés comunitario (DIC) para el establecimiento de una instalación fotovoltaica tras el informe desfavorable emitido por el municipio afectado (Torres-Torres). En este caso se pone de manifiesto cómo dentro

de la propia Administración autonómica se produce una contradicción de informes, pues al informe favorable sobre el estudio de integración paisajística que acompaña a la DIC, emitido por el Servicio Territorial de Ordenación del Territorio, se contraponen el informe desfavorable del mismo Servicio, pero de la Sección Forestal, siendo finalmente la decisión del Servicio Territorial de Ordenación del Territorio la propuesta de denegación de la solicitud de DIC, que se materializa en la resolución impugnada del *conseller* de 18 de agosto de 2008. El TSJ, al analizar el caso, pone en evidencia la aplicación por parte de la Administración de normas derogadas, de tal manera que ello tiene una trascendencia clave en el asunto, pues frente a la prohibición de las NNSS de Torres-Torres de albergar instalaciones industriales, la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de Suelo no Urbanizable valenciana incluye como uso posible la generación de energía procedente de fuentes renovables, lo que hace primar ante el régimen transitorio dispuesto en esta última lo establecido por la Ley. Asimismo, el Tribunal destaca que el uso de estas energías es un deseo expresado desde diversas instancias, como manifiestan la Directiva 2001/77/CE y, a nivel nacional, el Plan de Energías Renovables (PER) de 2005-2010. También es de interés la argumentación que el Tribunal realiza sobre, en este caso, la denegación de la DIC a partir del informe negativo del ayuntamiento referido. La DIC es una manifestación de la potestad discrecional de la Administración engarzada con el ejercicio de potestades urbanísticas que, como advierte el Tribunal, no debe fundamentarse en el informe negativo del ente municipal, que carece en todo caso de carácter vinculante; además, hay constancia de la conformidad del Ayuntamiento a otro proyecto similar de instalación, por lo que se produce una clara desigualdad entre ambas situaciones. En este caso, al analizar el ejercicio de potestades discrecionales, el Tribunal aplica la doctrina de “reducción a cero de la discrecionalidad”, de manera que, al estimar el recurso íntegramente, obliga a la Administración a expedir la declaración de interés comunitario solicitada.

3. Urbanismo y medio ambiente

El TSJ de la Comunidad Valenciana, en la Sentencia 292/2011, de 22 de marzo, resuelve el recurso interpuesto por la mercantil Natura D’Or Borriol 2000, S. L. U., frente a una desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto por esta contra el Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón de 26 de abril de 2007, en el que se denegó la aprobación definitiva de la homologación y el plan parcial Natura

D'Or de Borriol sobre la base de la declaración de impacto ambiental (DIA) negativa de la Secretaría Autonómica de Territorio y Medio Ambiente.

Entre las argumentaciones de la Administración demandada, la GVA, se aduce la discrecionalidad de la Administración en el planeamiento urbanístico. En este caso, la discrecionalidad se plantea en relación con la clasificación del “suelo como no urbanizable protegido”, esto es, otorgándole un especial valor ambiental, lo cual le merece la oportuna protección natural. Al respecto, el TSJ, siguiendo la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en la Sentencia de 3 de julio de 2007, manifiesta el carácter reglado y no discrecional de aquella clasificación, de ahí su carácter obligatorio, y la necesidad de que la alteración de esta clasificación requiera la acreditación de desaparición de las condiciones y características que en su día dieron lugar a la clasificación de especial protección. El Tribunal también puntualiza sobre el derecho de que goza el promotor urbanístico de un plan parcial al trámite de este sobre la base de la hoy derogada LRAU (Ley 6/1994), el cual, en ningún caso, insiste, condiciona la discrecionalidad de la Administración en el ejercicio de la potestad urbanística. Sobre la base de los razonamientos anteriores, el TSJ desestima el recurso presentado.

En la Sentencia 241/2011, de 21 de marzo, el TSJ de la Comunidad Valenciana conoce del recurso interpuesto por la Administración del Estado frente al Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de 26 de mayo de 2008, por el que se dispuso la aprobación definitiva de la homologación y el plan parcial del sector Pinares del Meclí de Tibi, siendo partes demandadas la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Tibi y Terra Recursos Inmobiliarios, S. L.

El abogado del Estado alega en su demanda el informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que estima que no existían recursos hídricos suficientes para abastecer el incremento de demanda que suponía la aprobación del acuerdo impugnado, basándose así en el carácter vinculante de dicho informe a partir de lo dispuesto en la DA 2ª.4 de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas. Del repaso que realiza la Sentencia sobre la base de pronunciamientos anteriores, como la STSJCV 288/2010, de 12 de marzo, se determina que el informe es, en efecto, preceptivo, pero en ningún caso, salvo que la legislación así lo prevea expresamente, que no es el caso, vinculante, como se infiere del artículo 25.4 del TR de la Ley de Aguas estatal, así como del artículo 15 del TR de la Ley de Suelo. Sin embargo, como se manifiesta en el voto particular formulado por el

magistrado Edilberto Narbón, debe tenerse en cuenta que el carácter no vinculante no le exime de su carácter determinante, lo que exige que, en caso de que la Comunidad Autónoma se separe de ellos, lo haga de forma motivada. Finalmente, el TSJ insiste en la necesidad de que el incremento de las necesidades de abastecimiento esté acreditado y pone de relieve las graves consecuencias que se derivan del desarrollo y la ejecución de una actuación urbanística sin las suficientes garantías de suministro de agua en cantidad suficiente.

Un asunto próximo se trata en la Sentencia 316/2011, de 4 de abril, recaída sobre el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la aprobación de la homologación y el plan parcial de la unidad de ejecución única San Rafael Golf, al no acreditarse la disponibilidad de recursos hídricos, como informa (desfavorablemente) la Confederación Hidrográfica. Sobre el carácter preceptivo y no vinculante del informe, el Tribunal se manifiesta claramente, recordando, entre otros, el Auto del TSJCV de 15 de enero de 2007. Pero también se refiere al cambio legislativo producido con la Ley de Suelo de 2007, que considera los informes de la Administración hidráulica como “determinantes” (art. 15), calificativo que el TS ha entendido que plantea “una hipótesis cercana al valor vinculante de los informes”. En este caso, el TSJ desestima el recurso debido a la modificación sustancial de la situación fáctica que motivó el informe desfavorable, al haberse otorgado en el curso del proceso una concesión de aguas que acreditaba una mayor disponibilidad de recursos hídricos.

En este caso resuelto por la Sentencia 291/2011, de 29 de marzo, se plantea al TSJCV el recurso de un particular contra la aprobación definitiva del Plan Parcial Modificativo del Sector SUZ-3 Sierras de Serra, por no incluir en el Plan Parcial impugnado los terrenos de su propiedad, al considerar el particular que sus terrenos son un área de especial protección y cumplirse en los terrenos el criterio de proximidad, frente a otros terrenos incluidos que gozaban de menor nivel de protección. La Administración alega ante las pretensiones anteriores la discrecionalidad de la que goza en el ejercicio de potestades urbanísticas; sin embargo, esta discrecionalidad requiere una justificación que en este caso no existe, por lo que el TSJ estima que la resolución impugnada no es conforme a derecho y estima parcialmente el recurso del demandante, si bien desestima su pretensión de un derecho subjetivo a que sus terrenos sean incluidos en el área de reparto del sector, al ser esta la opción que efectivamente es más conveniente para sus intereses particulares, pero no necesariamente la mejor para el interés público.

4. Parques naturales

Otra importante sentencia del TSJ es la 172/2011, de 28 de febrero, en la que el objeto de litigio es el Parque Natural del Turia, un parque, como destaca el propio Tribunal, que tiene una gran relevancia desde el punto de vista ambiental. Así, el Tribunal lo considera el “último gran pulmón del área metropolitana de la ciudad de Valencia y las comarcas de L’Horta y Camp de Túria”, siendo las demandas planteadas dos: una contra la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Turia (PORN) y otra contra la declaración del Parque Natural del Turia (PDPN), por entender la actora que en el citado parque se incluyen terrenos que no reúnen los requisitos necesarios para su inclusión y, en consecuencia, no son merecedores de especial protección, al desear su calificación como urbanizables. Todas las alegaciones de los actores son claramente rebatidas por el TSJ, quien finalmente desestima el recurso planteado, manteniendo así en toda su extensión la delimitación del Parque Natural, con el consiguiente beneficio ambiental que ello supone.

Sumari: 1. Telefonía mòbil i medi ambient (Sentències del Tribunal de Justícia de la Comunitat Valenciana 300/2011, de 25 de març, i 347/2011, de 7 d'abril). 2. Energies renovables (Sentències del Tribunal de Justícia de la Comunitat Valenciana 294/2011, de 22 de març, i 1307/2011, de 24 de juny). 3. Urbanisme i medi ambient (Sentències del Tribunal de Justícia de la Comunitat Valenciana 292/2011, de 22 de març, i 241/2011, de 21 de març, i 291/2011, de 29 de març, Sentència 316/2011, de 4 d'abril). 4. Parcs naturals (Sentència del Tribunal de Justícia de la Comunitat Valenciana 172/2011, de 28 de febrer).

Al llarg de l'any 2011 els pronunciaments del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana relacionats amb el medi ambient han estat nombrosos i de gran varietat temàtica. Això pot tenir dues lectures: d'una banda, lamentablement que els danys al medi ambient s'han convertit en una constant; i de l'altra, amb caràcter positiu, el control més gran que els tribunals fan del mitjà natural, que n'afavoreix la protecció. De les sentències examinades passem a destacar les que ens semblen més rellevants.

1. Telefonía mòbil i medi ambient

En la Sentència del TSJ de la CV 300/2011, de 25 de març, l'objecte de discussió és l'aprovació de l'ordenança municipal reguladora dels requisits urbanístics per a la instal·lació i col·locació d'infraestructures radioelèctriques en un municipi que és recorreguda per part de FRANCE TELECOM ESPAÑA S. A. El Tribunal, estimant en part el recurs, anul·la l'article 6.1.c) de l'ordenança, que prohibeix la instal·lació d'infraestructures en espais sensibles, i fixa una distància mínima entre aquestes zones i qualsevol implantació d'estacions radioelèctriques. Així mateix, aborda la polèmica sobre si cal o no cal "llicència d'activitat" als operadors de telefonía mòbil, i recull les dues postures mantingudes en la jurisprudència; d'una banda, els pronunciaments que entenen justificada aquesta exigència, cas de la Sentència del TSJCV 441/2003, de 17 de març, basant-se en el principi de precaució i en el que disposa l'article 2 del Decret 2414/1961, de 30 de desembre; de l'altra, les sentències, com la del TSJ de Navarra de 2 d'octubre de 2010, que, basant-se en el principi *favor libertatis*, aconsella no imposar restriccions, de manera que la Sala, en l'assumpte que ens ocupa, es decanta per aquesta segona opció. En relació amb les competències municipals, seguint la jurisprudència del TS, el TSJ entén que els municipis poden regular aquestes matèries basant-se en les que se li reconeixen en matèria d'urbanisme i medi ambient, però no per això ha d'excedir-se a l'hora d'exercir-les. També amb aquesta temàtica, la Sentència del TSJCV 347/2011, de 7 d'abril, discuteix sobre la suspensió de les obres per a la instal·lació d'una estació base de telefonía mòbil a causa de la necessitat que la instal·lació

d'antenes mòbils requereixi, per exigència de les ordenances municipals, llicència d'activitat. Qüestió que, havent-se tractat en nombroses sentències, com l'anterior, es considera contrària de dret i, per tant, la seva exigència nul·la, ja que aquesta és una qüestió de competència estatal.

2. Energies renovables

El TSJ de la Comunitat Valenciana, en el Pronunciament 294/2011, de 22 de març, coneix del recurs interposat per una associació ecologista contra l'ordre de l'Administració valenciana autonòmica per mitjà de la qual es fa una convocatòria pública nova per al desenvolupament i execució del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d'instal·lar més estacions eòliques en algunes zones. En primer lloc, el TSJ es planteja si hi ha algun recurs indirecte contra el Pla Eòlic, ja que aquest no és una disposició de caràcter general. No obstant això, el TSJ atribueix caràcter normatiu al Pla i entén, per tant, que és susceptible de recurs indirecte, que, no obstant això, ha de versar sobre motius concrets que relacionin la convocatòria impugnada amb el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, atès el caràcter normatiu limitat del Pla. És molt interessant el FJ número 5, el qual, seguint la jurisprudència del Tribunal Constitucional, reconeix un valor essencial al medi ambient que s'ha de tenir en compte en el discerniment de conflictes, però que, també, s'ha de compaginar amb altres béns constitucionalment rellevants, com el desenvolupament econòmic, sense que prevalgui sempre l'interès ambiental. En aquest cas, les instal·lacions eòliques presenten intrínsecament un evident valor ambiental, ja que s'emmarquen en les anomenades energies renovables, però amb conseqüències econòmiques evidents. El TSJ desestima el recurs interposat en la seva totalitat.

El TSJ tracta en el Pronunciament 1307/2011, de 24 de juny, sobre diversos recursos interposats per una mercantil contra l'acord del conseller de Medi Ambient que denega la "declaració d'interès comunitari" (DIC) per a l'establiment d'una instal·lació fotovoltaica, després de l'informe desfavorable emès pel municipi afectat (Torres-Torres). El cas posa de manifest com en la mateixa Administració autonòmica hi ha una contradicció d'informes, ja que enfront de l'informe favorable sobre l'Estudi d'integració paisatgística que acompanya la DIC emès pel servei Territorial d'Ordenació del Territori, es contraposa l'informe desfavorable del mateix Servei, però

de la Secció Forestal, amb la qual cosa, finalment, la decisió del Servei d'Ordenació del Territori és la proposta de denegació de la sol·licitud de DIC, que es materialitza en la Resolució del conseller de 18 d'agost de 2008, impugnada. El TSJ, havent analitzat el cas, posa en evidència l'aplicació per part de l'Administració de normes derogades, de tal manera que això té una transcendència clau en l'assumpte, ja que, enfront de la prohibició de les NS de Torres-Torres d'acollir instal·lacions industrials, la Llei 10/2004, de sòl no urbanitzable valenciana, inclou com a ús possible la generació d'energia procedent de fonts renovables, fet que fa prevaler davant el règim transitori disposat en aquesta última el que estableix la llei. Així mateix, el Tribunal destaca com l'ús d'aquestes energies és el desig expressat des de les instàncies europees, com manifesta la Directiva 2001/77/CE i, en l'àmbit nacional, el Pla d'Energies Renovables (PER) 2005-2010. A més és interessant l'argumentació del Tribunal, en aquest cas, sobre la denegació de la DIC basant-se en l'informe negatiu de l'Ajuntament referit. Es tracta que la DIC doni una manifestació de la potestat discrecional de l'Administració enfilada amb l'exercici de potestats urbanístiques, que, com adverteix el Tribunal, no ha de fonamentar-se en l'informe negatiu de l'ens municipal, que manca, en tot cas, de caràcter vinculant, a més que queda constatada la conformitat de l'Ajuntament a un altre projecte similar d'instal·lació, amb la qual cosa hi ha una desigualtat clara entre ambdues situacions. En aquest cas, en analitzar l'exercici de potestats discrecionals, el Tribunal aplica la doctrina de "reducció a zero de la discrecionalitat", de manera que el Tribunal, en estimar el recurs íntegrament, determina, així mateix, l'obligació de l'Administració a expedir la declaració d'interès comunitari sol·licitada.

3. Urbanisme i medi ambient

El TSJ de la Comunitat Valenciana, en la Sentència 292/2011, de 22 de març, resol el recurs interposat per la mercantil Natura D'Or Borriol 2000 S.L.U. enfront de la desestimació presumpta del recurs d'alçada interposat per la mateixa companyia contra l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló de 26 d'abril de 2007, en la qual es va denegar l'aprovació definitiva de l'Homologació i Pla Parcial Natura D'Or de Borriol, basant-se en la declaració d'impacte ambiental (DIA) negativa de la Secretaria Autònoma de Territori i Medi Ambient.

Entre les argumentacions de l'Administració demandada, la GVA, adduïm la discrecionalitat de l'Administració en el planejament urbanístic. En aquest cas, la discrecionalitat es planteja en relació amb la classificació del "sòl com a no urbanitzable protegit", això és, atorgant-hi un valor ambiental especial, la qual cosa mereix l'oportuna protecció natural. Referent a això, el TSJ, seguint la doctrina fixada pel Tribunal Suprem en la Sentència de 3 de juliol de 2007, manifesta el caràcter reglat i no discrecional de la classificació, d'aquí ve el seu caràcter obligatori, i la necessitat que l'alteració d'aquesta classificació exigeixi l'acreditació de desaparició de les condicions i característiques que en el moment oportú van donar lloc a la classificació d'especial protecció. El Tribunal també puntualitza sobre el dret que té el promotor urbanístic d'un pla parcial al tràmit del mateix pla basant-se en la derogada LRAU (Llei 6/1994), que en cap cas, insisteix, condiona la discrecionalitat de l'Administració en l'exercici de la potestat urbanística. Basant-se en els raonaments anteriors, el TSJ desestima el recurs presentat.

En la Sentència 241/2011, de 21 de març, el TSJ de la Comunitat Valenciana coneix del recurs interposat per l'Administració de l'Estat enfront de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme d'Alacant de 26 de maig de 2008, per mitjà de la qual es va disposar l'aprovació definitiva de l'Homologació i Pla Parcial del Sector "Pinares del Meclí" de Tibi. La Generalitat Valenciana, l'Ajuntament de Tibi i Terra Recursos Inmobiliarios S.L. en van ser parts demandades.

L'advocat de l'estat, en la demanda, al·lega l'informe desfavorable de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que estima que no hi havia recursos hídrics suficients per abastir l'increment de demanda que suposava l'aprovació de l'acord impugnat, basant-se, així, en el caràcter vinculant d'aquest informe d'acord amb el que disposa la DA 2.4 de la Llei 13/2003, de 23 de maig, reguladora del contracte de concessió d'obra pública. Del repàs que realitza la sentència basant-se en pronunciaments anteriors, com la STSJCV 288/2010, de 12 de març, es determina que l'informe és, en efecte, preceptiu, però en cap cas —tret que la legislació així ho prevegi expressament, que no és el cas—, vinculant, com se sosté de l'article 25.4 del TR de la llei d'aigües estatal, així com de l'article 15 del TR de la llei de sòl. No obstant això, com manifesta el vot particular formulat pel magistrat Sr. Edilberto Narbón, cal tenir en compte que el caràcter no vinculant no l'eximeix del seu caràcter determinant, la qual cosa exigeix que en cas que la comunitat autònoma se'n separi, ho faci de forma motivada.

D'altra banda, el TSJ insisteix en la necessitat que l'increment de les necessitats de proveïment estiguin acreditades, i posa en relleu les greus conseqüències que es deriven del desenvolupament i execució d'una actuació urbanística sense les suficients garanties de subministrament d'aigua a bastament.

Un assumpte proper tracta la Sentència 316/ 2011, de 4 d'abril, en el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra l'aprovació de l'Homologació i Pla Parcial de la Unitat d'Execució "Única San Rafael Golf", ja que acredita la disponibilitat de recursos hídrics, com informa (desfavorablement) la Confederació Hidrogràfica. Sobre el caràcter preceptiu i no vinculant, el Tribunal es manifesta clarament, recordant entre altres, la Interlocutòria del TSJCV de 15 de gener de 2007. Però també es refereix al canvi legislatiu que hi ha hagut amb la llei de sòl de 2007, que cataloga els informes de l'Administració hidràulica com a "determinants" (art.15), qualificatiu que el TS ha entès que planteja *"una hipòtesis cercana al valor vinculante de los informes"*. El TSJ desestima el recurs, en aquest cas, a causa de la modificació substancial de la situació fàctica que va motivar l'informe desfavorable, ja que en el curs del procés es va atorgar una concessió d'aigües que acreditava més disponibilitat de recursos hídrics.

En aquest cas resolt per la Sentència 291/2011, de 29 de març, es planteja al TSJCV el recurs d'un particular contra l'aprovació definitiva del Pla Parcial Modificatiu del Sector SUZ-3 Sierras de Sierra, perquè no ha inclòs en el Pla Parcial impugnat els terrenys de la seva propietat, ja que el particular ha considerat que els seus terrenys són una àrea d'especial protecció, a més que els terrenys complien el criteri de proximitat, enfront d'altres terrenys inclosos que tenien menys nivell de protecció. L'Administració al·lega, enfront de les pretensions anteriors, la discrecionalitat que té en l'exercici de potestats urbanístiques; no obstant això, aquesta discrecionalitat requereix justificació, que, en aquest cas, no existeix, per això el TSJ estima que la resolució impugnada no és conforme a dret, i estima parcialment el recurs del demandant, a qui, no obstant això, recorda i desestima la seva pretensió del dret subjectiu que els seus terrenys s'han d'incloure en l'àrea de repartiment del sector, ja que aquesta és l'opció que, efectivament, és més convenient per als seus interessos particulars, però no necessàriament la millor per a l'interès públic.

4. Parcs naturals

Una altra sentència important del TSJ és la Sentència 172/2011, de 28 de febrer, en la qual l'objecte de litigi és el Parc Natural del Túria, un parc, com destaca el mateix Tribunal, que és molt rellevant des del punt de vista ambiental. Així, el Tribunal el titlla de l'“*último gran pulmón del área metropolitana de la ciudad de Valencia y las comarcas de L'Horta y Camp de Túria*”. En aquest cas, les demandes plantejades són dues: una contra l'aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Túria (PORN), i l'altra contra la declaració del Parc Natural del Túria (PDPN), ja que l'actora entén que aquest parc inclou terrenys que no reuneixen els requisits necessaris perquè hi siguin i, en conseqüència, no són valedors d'especial protecció, ja que vol que siguin qualificats com a urbanitzables. Totes les alegacions dels actors són clarament rebatudes pel TSJ, que, finalment, desestima el recurs plantejat, i manté, així, en tota la seva extensió, la delimitació del parc natural amb el consegüent benefici ambiental que això suposa.